



VIOLENCIA EN MÉXICO >

2025, el año letal para los buscadores de desaparecidos en México

Siete han sido asesinados y otros cuatro siguen sin ser localizados en plena búsqueda de sus hijos, sus hermanos o sus padres. Veracruz, Jalisco y Guanajuato son las entidades con más casos de esta violencia



BEATRIZ GUILLÉN

México • 12 ENE 2026 • 06:30 CET



Regula de Vinagre de la provincia en Veracruz el 21 de marzo de 2025.
ADOLFO VILLAMER (CARTASINERO)

El 26 de enero de 2025 [desaparecieron a Héctor Aparicio](#) en Tihuatlán, al norte de Veracruz, en el mismo lugar donde buscaba a su hijo desde 2017. El 12 de marzo, tras seis años detrás de su hija, [murió Magdalena Pérez](#), en Poza Rica, también Veracruz, por las heridas que le dejó la captura y tortura de policías. En abril el dolor se trasladó a Jalisco: [el 2 murió tras un intento de secuestro Teresa González](#), que buscaba a su hermano, en Guadalajara, y el 24, en Tlajomulco, [fue asesinada María del Carmen Morales junto a su hijo Daniel](#); ella buscaba desde febrero a Ernesto, su otro hijo. El 9 de junio en Uruapan, Guanajuato, [un comando armado se llevó de su casa a Francisco Arias, Panchito](#), y mató a su hijastro, Jaime González. El 16 de julio asesinaron a Gabriel Hernández en Reynosa, Tamaulipas, y el 11 de agosto a Roberto Hernández, en Ixtapaluca, en el Estado de México. El 26 de agosto, cuando Aída Karina Juárez llevaba apenas dos meses buscando a su hija, [fue secuestrada en Zacatecas](#). Encontraron su cuerpo dos días más tarde. El 14 de octubre se llevaron a María de los Ángeles Valenzuela en Mazatlán, Sinaloa, que buscaba a su padre desde el año anterior. También Yaritza Pérez buscaba al suyo en Ocosingo, Chiapas, pero la mataron el 23 de noviembre. Antes de que terminaran los días, el 28 de diciembre, en el Valle de Santiago, en Guanajuato, se llevaron a José Juan Arias, que desde hacía seis meses perseguía sin descanso el rastro de su hijo. Si 2025 es un recuento de violencia, es el más letal para los buscadores de desaparecidos en México.



En el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación hay más de 133.000 casos. La plataforma presenta irregularidades —hay entradas duplicadas, otras sin suficiente información, algunas personas ya se encontraron—, sin embargo, [nadie duda del tamaño de la crisis](#). En México las desapariciones se suceden en espiral y ningún Gobierno ha sido capaz de frenarlas. El de Claudia Sheinbaum acumuló 14.000 registros de desaparición en 2025, un 20% más que el año anterior y el doble con respecto a 2019, el curso de estreno de su predecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador.

Así, las desapariciones se han convertido en la piedra en el zapato de unas Administraciones volcadas en disminuir la percepción de violencia y [también en el “paradigma del crimen perfecto”](#), según documentó el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. El Estado no busca y, por tanto, tampoco resuelve. El 95% de los casos queda impune. En ese escenario irrumpen ellas, las familias buscadoras.

¿Quién iba a buscar a [Johan Alain Hernández](#) si no era su padre? Este muchacho, de 18 años, desapareció el 3 de septiembre de 2024 dentro de un fraccionamiento de Ixtapaluca, en el Estado de México. Después de meses sin respuesta, su familia intensificó la búsqueda: cortó carreteras, colocó masivamente la ficha de Johan, presionó a las autoridades en redes sociales. Hasta que la Fiscalía del Estado de México detuvo a cuatro personas relacionadas con la desaparición, una de ellas tenía guardado el celular del chico. Estos resultados tuvieron repercusiones. Roberto Hernández y su familia empezaron a recibir amenazas. Hasta que el 11 de agosto, sujetos armados a bordo de una moto entraron al mismo fraccionamiento de donde se habían llevado antes a Johan Alain y acribillaron a su padre. Roberto falleció frente a su casa mientras limpiaba su coche.

“El Estado mexicano no está previniendo las desapariciones, es decir, no está haciendo valer el derecho de las personas a no ser desaparecidas, pero tampoco el derecho a ser buscadas, porque no busca. Y de última ni siquiera garantiza la seguridad de las



personas que están buscando, que son las que están haciendo las tareas del Estado”, resume María de Vecchi Gerli, investigadora de Artículo 19. Esta organización, que lleva un conteo desde 2010 de los crímenes contra buscadores, ha registrado 42 desapariciones o asesinatos de estos activistas desde entonces. En estos últimos 15 años, 2025 ha sido el más letal de todos.

Algunos de los buscadores atacados este año contaban con medidas de protección. Es el caso de José Juan Arias, de Valle de Santiago, en Guanajuato, quien estaba incluido en el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación por el riesgo que implicaba buscar a su hijo. A su hijo, de 14 años, llamado como él pero conocido como Juanito, [se lo llevó un operativo militar de su casa en junio de 2025](#). “Él me grita y veo que ya se lo van llevando”, contaba su padre en una entrevista, “me bajo, trato de ayudarlo, abro el portón, pero no me dejan salir, eran del Ejército y de la Guardia [Nacional]”. Las autoridades buscaban a una persona que estaba presuntamente secuestrada en su vivienda. “Revisaron todo, no encontraron nada y yo les decía: ‘Pero, oye, se llevaron a mi hijo’”. La familia puso una denuncia y llegó a saber que el niño había llegado al edificio de la Fiscalía. De ahí, ni un rastro más. “Tenemos la esperanza de que nos lo regresen”, decía en octubre José Juan Arias, con los ojos en llanto. Sin embargo, el 28 de diciembre de 2025 fue él quien fue desaparecido. El pánico tiene ahora paralizada a su familia.

El Comité de la ONU ha emitido acciones urgentes en las que solicita al Estado mexicano que busque de forma inmediata a Arias. Lo mismo con los otros cinco buscadores desaparecidos en Guanajuato estos últimos años: Martha Leticia Gallardo, en 2018, [Lorenza Cano](#), Óscar Jiménez y Luz Alejandra, en 2024, y en 2025 también a Panchito Arias. “No es el primer mecanismo internacional que manifiesta su preocupación por lo que está sucediendo”, señala Raymundo Sandoval, fundador de la Plataforma por la Justicia y la Paz de Guanajuato, que acompaña a las familias. Esta entidad, [que lleva desde 2019 ocupando el primer puesto en violencia letal en México](#), comparte este año con Veracruz y Jalisco, el título de los Estados más afectados por los crímenes contra buscadores.